NUEVA SOCIEDAD NRO.127 SEPTIEMBRE- OCTUBRE 1993, PP. 13-18

Perú. El neoliberalismo realmente existente

Béjar, Héctor

Héctor Béjar: Escritor y periodista peruano. Presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación del Perú - CEDEP, Lima. Coordinador del Consejo Editor de la revista Socialismo y Participación. Autor de los libros Las guerrillas de 1965 en el Perú, La organización campesina. Ha publicado numerosos artículos y ensayos sobre la realidad peruana.

El Perú está recorriendo el complicado camino diseñado por sus acreedores para saldar su deuda de unos 18.500 millones de dólares que crecen todos los días. Desde agosto de 1990 ha reiniciado sus pagos, abonando casi mil millones de dólares, pero debe 8.000 millones al Club de París y 6.000 millones a los bancos privados. Le falta todavía un largo recorrido y nadie puede asegurar hoy que esta deuda, en la que los intereses se acumulan más que las amortizaciones, sea de verdad pagable. Porque está pagando intereses leoninos. En las negociaciones de junio de 1993 ha reconocido una deuda de 1.200 millones de dólares a la empresa japonesa JAPECO, por el oleoducto norperuano que costó 400 millones en 1973; y 180 millones de dólares a la aseguradora AIG, por la empresa norteamericana Belco, que no costaba más de 40 millones de dólares cuando fue expropiada en 1986.

Durante este año 1993 debe pagar 1.258 millones de deuda externa. A cambio de ello, sólo recibirá préstamos por 721 millones de dólares: resultará solventando 537 millones más de lo que recibe. Se ha convertido hasta el momento en un exportador más de divisas a los países centrales mediante el procedimiento de pagar intereses elevados, vender empresas a precio de chatarra y compensar expropiaciones a precio de oro. Para saldar este déficit, el gobierno tiene la esperanza de atraer compradores de empresas públicas o inversionistas. Los taiwaneses ya invirtieron unos 180 millones de dólares durante los últimos cuatro años y se dice que 85 inversionistas tienen otros 500 millones disponibles para «joint ventures» con empresas peruanas. La Shougang Corporation de la República Popular China adquirió Marcona, la más grande mina de hierro; y se aprestaría a comprar la principal siderúrgica del país ubicada en Chimbote y un paquete de acciones en la más importante productora privada de cobre, la norteamericana Southern Corp.

El Perú se orienta hoy a ser base para negocios asiáticos - coreanos, taiwaneses, japoneses y chinos -, ubicándose en un proceso en que la cuenca del Pacífico será

uno de los más activos centros de la economía mundial. A ello ayuda, desde luego, la afinidad etno-cultural del presidente Alberto Fujimori y parte de su equipo de gobierno - integrado por descendientes de inmigrantes chinos y japoneses -, con Japón principalmente y, en menor grado, con Corea, Taiwán y China.

El shock económico

El programa estructural aplicado desde agosto de 1990 está compuesto por la reducción de la protección arancelaria para la industria manufacturera, la anulación de los subsidios a las exportaciones, la reprivatización de 174 empresas públicas (conseguida sólo en parte y con muchas dificultades), la reinstauración del mercado de tierras, el cierre de los bancos de fomento y el despido masivo de empleados estatales. El programa de ajuste iniciado simultáneamente, tenía por objetivos reducir el déficit presupuestal y la liquidez monetaria para acabar con la inflación de 3.000% anual que dejó el gobierno de Alan García. Se inició con el super shock de agosto de 1990. En un solo día el gobierno hizo subir por decreto la inflación en un 439% y en 30 veces el precio de la gasolina, pulverizando las remuneraciones que ya habían perdido el 50% de su poder de compra entre 1985 y 1990.

En los meses siguientes fueron despedidos 200.000 trabajadores de la administración pública. Fueron anuladas formalmente o en la práctica todas las leyes de protección laboral fruto de las luchas sociales desde 1919. Al ser despedidos masivamente los trabajadores estatales, paralizarse la construcción y cerrarse cantidad de empresas industriales, el movimiento sindical perdió sus contingentes más organizados. Los dirigentes fueron cesados o quedaron aislados y la opinión pública no acompañó sus protestas: ya estaban desprestigiados por la saturación de huelgas en los servicios públicos. Los trabajadores de las pocas fábricas que continuaron funcionando mantuvieron una paz laboral excepcional para la historia sindical del Perú, por temor al despido. El sueldo mínimo fue congelado en 72 soles mensuales - unos 36 dólares de hoy - mientras que, por efecto de la violenta alza de precios, la canasta básica subió a 590 soles, unos 295 dólares de hoy.

En realidad, la deuda principal del Estado peruano no es con la banca internacional, sino con los asegurados desatendidos, los ahorristas estafados, los jubilados sometidos a pensiones de miseria y, en general, con quienes son marginados de los servicios públicos a pesar de pagar sus impuestos. Se calcula que la deuda del Estado con el Seguro Social llega a los 7 mil millones de dólares pero no es ni siquiera reconocida. Los ejecutores del programa neoliberal han sostenido que la pobreza generada por la aplicación del ajuste puede aliviarse con programas de compensa-

ción. Esta concepción tiene dos requisitos: que la compensación llegue rápida y directamente a quienes más la necesitan; y que sea temporal, es decir, que deje funcionando a la economía en condiciones normales de actividad, crecimiento y distribución de ingresos. Pero nadie sabe hasta cuándo durará el reajuste. Al comienzo, con la frialdad de un iceberg, el Ministerio de Economía no hizo el menor esfuerzo por habilitar fondos. Y después el resto del Estado, ya desmantelado por el propio programa, ha sido incapaz de llevar a cabo la compensación.

El desembolso del Estado en programas de emergencia apenas llegó al 7% de los gastos corrientes durante 1992. El conjunto de los rubros sociales - educación, salud, vivienda y emergencia -, no sobrepasó el 14%: sólo llegó a unos 300 millones de dólares. Entre 1986 y 1990, el Estado redujo su gasto social de 49 a 12,5 dólares por habitante. Desembolsaba 60 millones mensuales por pago de la deuda, pero sólo gastaba 8 millones de dólares en programas de emergencia. Entonces se produjo una falsa abundancia. Tuvimos superávit presupuestal en 1992 y reservas por 2.200 millones de dólares en 1993. El FONCODES terminó en azul en 1992, a pesar de que sus fondos fueron reducidos de 500 millones a 280 y luego a 163: sólo gastó 97 millones de dólares, menos del 30% de lo programado. En 1993, el 40% del presupuesto nacional se destina a gastos militares y deuda.

Los nuevos protegidos

Para pagar a los acreedores, se amplió la base tributaria a los microcomerciantes y profesionales y se incrementaron los impuestos. El gobierno aumentó el impuesto a las ventas a 18%, impuso 2% a los activos fijos de las empresas y confiscó a los trabajadores el 7% de sus salarios que antes usaba para construirles viviendas populares y ahora destina a gastos de infraestructura. La presión es mayor, pero recae sobre los mismos y deja afuera a quienes mueven más dinero: mientras los impuestos pesan como plomo sobre economías exiguas, el país sigue creando paraísos tributarios. Las multinacionales mineras y petroleras continúan disfrutando de convenios de estabilidad que les congelan el impuesto a la renta durante diez años a partir de cada contrato. También tienen diversos grados de exoneración las inversiones en zonas de frontera, en zonas francas y en selva, incluyendo las multinacionales que disfrutan de concesiones para destruir nuestros bosques. Además, como el programa es recesivo los ingresos del Estado continúan estancados en términos absolutos. En 1992 se recaudaron 1.103 millones de soles, casi la mitad de 1988, uno de los años de presión tributaria más baja. Como la banca peruana es, en la práctica, un servicio exclusivo de los grupos económicos dueños de los bancos y está abierta al público sólo para captar depósitos o hacer transacciones pero no para

otorgar préstamos a quienes no están en los grupos monopólicos, únicamente intermedia el 4% del PBI (estimado en 48.000 millones de dólares para 1991). Los microcomerciantes y campesinos no tienen acceso a la banca y pagan a los prestamistas informales intereses que llegan al 10% mensual en dólares.

Durante la crisis los grupos financieros han usado el dinero del público para prestarlo a sus empresas sin reponerlo, formando una «cartera pesada». Para que los bancos no quiebren, el gobierno creó el sistema de reestructuración financiera que permite la compra de estas deudas con 200 millones de dólares del tesoro.

Los marginados

El gobierno no hizo lo mismo con las mutuales y cooperativas de crédito, a las que dejó quebrar, arruinando a unos 50.000 ahorristas del Banco Central Hipotecario (del Estado), la Central de Cooperativas de Crédito, y las cooperativas y mutuales de Lima y provincias. Así, dentro del desenvolvimiento real del programa, la protección que antes estaba dirigida a la industria manufacturera y los monopolios importadores de alimentos se ha desplazado ahora hacia los grupos financieros, mientras se desprotege o confisca a los pequeños ahorristas, los agricultores, los exportadores de bienes no tradicionales, los pequeños productores, los industriales y a todos los demás grupos económicos. El neoliberalismo económico que enseña los dientes a los pobres, resulta siendo populismo y paternalismo en beneficio de los grupos financieros. Quienes aparentemente son partidarios del mercado libre manipulan las finanzas para eliminar los bancos pequeños, desaparecer los bancos estatales de fomento y concentrar los fondos públicos en unos cuantos bancos privados.

Como resultado de todo esto, a casi tres años de iniciado el programa, ya no tenemos una tasa mensual de inflación del 30% como fue bajo el gobierno de García, pero todavía hay un promedio mensual que oscila alrededor del 4% y amenaza de manera permanente con incrementarse. El producto nacional per cápita ha caído en 27% entre 1987 y 1991. Tenemos un nivel de producción 30% menor que en 1987, una liquidez real de la economía reducida al tercio, están en recesión las principales ramas de la industria manufacturera y el déficit presupuestal ha reaparecido en la primera mitad del año.

El pueblo sigue esperando que lleguen los días de bonanza prometidos por los autores del shock. Pero el programa del FMI continúa fabricando pobres todos los días. En el fatídico mes de agosto de 1991, su cantidad aumentó a 12 millones de per-

sonas: 60% de la población total y 95% de la población rural. En 1987, 30% de los habitantes estaba debajo del límite de pobreza; en 1990 ya era el 60%. Gran parte de la nueva generación surgirá de las condiciones más dramáticas de pobreza, a la par que de la baja de escolaridad, la impregnación del modelo consumista que muestran los medios masivos y la prescindencia de valores morales en la lucha por la vida. Lima, la capital, tiene hoy unos 150.000 niños trabajando en las calles en condiciones de mendicidad. Un 10% de la PEA está compuesta por niños de entre 6 y 14 años. El ajuste ya va durando tres años y aún no se avizora la luz al final del túnel. Por eso - por lo menos hasta el momento en que escribimos este artículo -, la ciudadanía rechaza el programa económico casi en la misma proporción en que apoya políticamente a Fujimori.

¿Por qué apoya a Fujimori un pueblo tan castigado? ¿Cómo puede seguir funcionando un país que exhibe un cuadro tan dramático? Sólo en Lima Metropolitana existen más de 5.800 comedores populares que proporcionan 746.000 raciones diarias sin ningún financiamiento estatal. De cada 100 habitantes de Lima, 12 se alimentan en un comedor popular. Las familias extensas reúnen los exiguos ingresos de sus miembros en fondos únicos para poder sobrevivir. Alrededor de 400.000 vendedores ambulantes y 300.000 microempresarios se ganan la vida como pueden; y 300.000 personas viven directa o indirectamente del narcotráfico. No menos de 100.000 viven de las diferentes actividades que tienen que ver con la seguridad. Un millón de peruanos ha emigrado para no regresar.

Al lado de la economía formal recesada existe una activa economía ilegal e informal dolarizada que es financiada por el tráfico de drogas, que se calcula en 1.500 millones de dólares anuales y los denominados capitales «golondrinos» que buscan los intereses pagados por las financieras peruanas a casi el doble de la tasa internacional. Las cuentas en dólares son el 84% de los depósitos bancarios totales. Este financiamiento explica que el Perú haya podido mantener en 1992 una balanza comercial desfavorable en 567 millones de dólares, casi cuatro veces mayor que en 1991. En tal situación prosperan florecientes importadores: 20.000 vehículos de todos los modelos, 400 millones de dólares anuales en alimentos, productos suntuarios sofisticados de todos los precios y para todos los gustos.

Ello también explica la tendencia al crecimiento del PBI anunciada este año por el INEI: mientras el sector comercial ha crecido, todos los sectores productivos (agropecuario, minería e industria) siguen recesados. El neoliberalismo real es comercial, no industrial; importador, no exportador; consumidor, no productivo.

Una parte de la oposición política se limita a pedir el retorno de la democracia y la izquierda calla desconcertada, pero nadie se opone en la práctica al programa económico. Nadie se atreve a sugerir caminos alternativos. Entonces la violencia delictiva y terrorista se convierte en lucrativo negocio de pequeños grupos y una forma de supervivencia o protesta de los desesperados. el delito y la defensa contra él son ocupaciones masivas que interalimentan un círculo vicioso de violencia privada. Más de 100.000 delitos fueron registrados en 1991 y otros miles no llegaron a los archivos policiales; 87.000 robos por año, 238 por día, 9 por hora. Para combatirlos, el sistema de seguridad involucra cerrajeros, vendedores e instaladores de alarmas y mecanismos detectores, empresas asesoras en seguridad, escuelas para defensa personal, guardaespaldas y vigilantes privados de todas las categorías. Las casas de las ciudades peruanas son pequeñas fortalezas enrejadas.

El terrorismo de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), inhiben a los otros sectores de la población. Cabe suponer que sin terrorismo de por medio, la protesta del pueblo contra el programa liberal hubiese sido mucho mayor.

A diferencia de sus antecesores, Fujimori ha conducido con mano firme la guerra contra el terrorismo obteniendo éxitos tan notables como la captura de Abimael Guzmán y la práctica liquidación del MRTA. El pueblo lo apoya en esa lucha y valora su coraje. Su política ha sido una represión más selectiva que en el pasado; el uso de instrumentos psico-sociales de propaganda; la constante realización de rastrillajes en los barrios populares de Lima; el control militar del orden en las universidades y la organización de rondas urbanas y rurales de autodefensa.

De hecho, los apagones de Lima casi han desaparecido. Todo vuelve lentamente a la normalidad en la vida urbana y la gente respira aliviada, aunque hay un estado latente de violencia parecido al de la inflación. Se ha logrado cierto control pero puede retornar en cualquier momento la eclosión de la violencia porque, en este caso como en el de la inflación, las causas últimas se mantienen. El proceso de cocalización de la selva continúa mientras el gobierno ha abandonado la denominada «doctrina Fujimori» que proponía la sustitución de cultivos de coca por otros rentables con apoyo estatal. Nada ha probado ser más rentable que la coca - el kilo de la pasta básica de cocaína es pagado en unos 240 dólares en la selva -, y los norteamericanos parecen haber perdido interés en su fracasada política de represión del cultivo y el tráfico. La red de la droga incluye a los cocaleros, pisadores de coca, bancos lavadores de dólares, transportistas de insumos y productos, distribuidores de

droga al menudeo en los barrios de las ciudades importantes y cambistas que ponen en circulación el dinero procedente del tráfico.

En la práctica, los acuerdos entre el Perú y el FMI permitieron que el Banco Central comprara de 3 a 10 millones de coca-dólares diarios según la época, para manipular el precio de la divisa o saldar parte de las deudas peruanas. Mientras se les pague, los acreedores no preguntan de dónde procede el dinero.

El shock político

Ambos programas - el estructural y el de ajuste de corto plazo - tuvieron, junto con la presión de la violencia terrorista, una directa consecuencia política: la concentración del poder en el presidente de la República y, para lograrlo, el cierre del Congreso el 5 de abril de 1992, la suspensión del proceso de regionalización y la intervención de los gobiernos regionales.

La derecha política afincada en los partidos no tardó en pagar las consecuencias de su apoyo al programa monetarista: el shock político que la desplazó del poder fue apoyado por la derecha económica constituida por los grupos financieros.

La lista gubernamental que obtuvo mayoría absoluta en las elecciones para el Congreso Constituyente anuncia ahora una Constitución cuyos signos más notables serían: un régimen económico de libre mercado y propiedad privada, pena de muerte para los terroristas y la posibilidad de que el actual presidente sea reelegido. Se abre paso un modelo de «liberalismo» autoritario: liberal para los acreedores internacionales y los grupos financieros nacionales, formalmente democrático ante la opinión internacional, autoritario para los demás sectores internos. Es apoyado por un grupo de generales y respaldado por la simpatía o tolerancia popular. El temor al senderismo latente, el desprestigio de la clase política que es símbolo de la democracia, los éxitos en la lucha antiterrorista y la apertura económica, explican el respaldo popular al golpe de Estado del 5 de abril y el modelo que lo continúa.

Así, la sociedad peruana pagará el precio de la guerra: sometimiento del Poder Judicial, relegamiento de los derechos humanos a un plano secundario de la conciencia nacional, consolidación del poder militar detrás del trono, manipulación de los medios de comunicación masiva por los organismos de inteligencia, organización de 20.000 milicianos bajo la conducción de los jefes militares en diferentes regiones y ciudades. Extraño monstruo que surge de la crisis económica y la incapacidad de las dirigencias políticas.

El nuevo Perú

La vieja oligarquía que combatieron los partidos de izquierda es ahora parte de una historia desconocida. Los nuevos ricos se cuidan de dar la cara. La economía campesina está en lenta extinción. Antes mayoritario, el campesinado ha devenido en minoritario en el conjunto de la población peruana. La recesión industrial y minera y el crecimiento demográfico han disminuido la gravitación de los sectores obreros en la vida nacional. La clase media se extiende, pero se empobrece.

La aplicación del ajuste ha radicalizado esos cambios. De 22 millones de peruanos, 7,5 son económicamente activos. En 1987, antes del primer ajuste, el 50% de esta población, 3,25 millones, tenía una remuneración superior a la necesaria para comprar la canasta mínima. Después del programa de ajuste sólo un 19%, unos 200.000, está adecuadamente empleado, mientras que el 73% está subempleado. El denominado sector informal urbano, que antes bordeaba el 30% de la PEA, sobrepasa ahora la mitad: 5 millones de personas.

La aspiración principal de los productores y comerciantes populares es penetrar el mercado. Y su lugar de operaciones es el hogar para la producción y la calle para la venta. No son anticapitalistas, reivindican su derecho a vivir en un país que les es negado aunque es también suyo. La educación ya no es, como fue en el pasado, una vía de ascenso social. Ahora educan la calle y los medios de comunicación masiva. La solución de los jóvenes es la migración familiar o la educación rápida en carreras cortas para el progreso individual.

Los peruanos que en 1990 tenían 18 años, nacieron en 1972 y tenían sólo 8 años cuando se reinstauró la democracia en 1980. Ellos ignoran los mitos conservadores o revolucionarios de los 70, sólo se guían por su pragmatismo: simpatizan con Fujimori porque temen la inflación y quieren estabilidad y tranquilidad. Les gusta el libre mercado, quieren librarse de los terroristas, temen a los militares, desconfían de los políticos. Demandan resultados, no discursos. Aceptan la desigualdad, pero son contrarios a cualquier discriminación. Los nuevos mitos son el progreso individual, el trabajo independiente o la vida en el extranjero. Ellos tienen nuevas necesidades: empleo, alimentación, seguridad, paz, vivienda. La democracia se desprestigió por no dar respuesta a estas necesidades.

No ha existido comunicación entre estas generaciones y los líderes formados en los 60 ó 70. Los partidos políticos no fueron escuela de ciudadanía. Las reivindicaciones y expectativas de estas nuevas formaciones sociales, las diferencias etnocultu-

rales que las separan del resto de las clases medias y altas, su difícil pero activo proceso de adaptación a una sociedad moderna, demandan nuevos enfoques y conductas.

El programa liberal es apoyado globalmente - aun considerando el rechazo por el programa económico -, porque aparece como la única posibilidad, el oscuro túnel en cuyo final puede estar la salida. No se trata entonces de sostener que el túnel es oscuro y no conduce a ninguna parte, y menos de retroceder, sino de encontrar otra salida.

Lima, julio de 1993.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 127, Septiembre- Octubre de 1993, ISSN: 0251-3552, **<www.nuso.org>.**